



PODER JUDICIAL
República del Perú



LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

Ministerio Público

CONVENIO MARCO TRIPARTITO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL PODER JUDICIAL DE LA REPÚBLICA, EL MINISTERIO PÚBLICO Y LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Conste por el presente documento, el Convenio Marco Tripartito de Cooperación Interinstitucional que celebran de una parte el **PODER JUDICIAL** con RUC N° 20159981216, con domicilio en Av. Paseo de la República s/n – Lima, Palacio Nacional de Justicia, debidamente representado por el Presidente del Poder Judicial, Doctor **CÉSAR SAN MARTÍN CASTRO**, identificado con DNI N° 06058180, autorizado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en virtud a las atribuciones contenidas en el Artículo 82° numeral 21 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial (D.S. N° 017-93-97-JUS), a quien en adelante se le denominará **EL PODER JUDICIAL**; el **MINISTERIO PÚBLICO**, con RUC N° 20131370301, con domicilio legal en la Av. Abancay Cuadra 5 s/n, Distrito del Cercado de Lima, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representado por el señor Fiscal de la Nación, Doctor **JOSÉ ANTONIO PELÁEZ BARDALES**, identificado con DNI N° 08238096, elegido por Resolución de la Junta de Fiscales Supremos N° 030-2011-MP-FN-JFS de fecha 14 de Abril de 2011, a quien en adelante se denominará **EL MINISTERIO PÚBLICO**; y **LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**, en adelante **LA CONTRALORÍA** con domicilio en el jirón Camilo Carrillo N° 114, Jesús María, Lima, debidamente representada por el Contralor General de la República señor **FUAD KHOURY ZARZAR**, identificado con DNI N° 08235709, designado mediante Resolución Legislativa del Congreso N° 007-2008-CR, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES

EL PODER JUDICIAL es un Poder del Estado regulado por la Constitución Política del Perú y el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S. N° 017-93-JUS, con potestad de impartir justicia, ejerciendo tal función a través de sus órganos jerárquicos; siendo en su ejercicio funcional autónomo en lo político, administrativo, económico, disciplinario, e independiente en lo jurisdiccional, con sujeción a la Constitución y las leyes, teniendo como una de sus atribuciones la de coadyuvar a la mejora de la impartición de justicia, requiriendo para ello coordinar y desarrollar un conjunto de actividades con otras entidades del Estado.

EL MINISTERIO PÚBLICO es un organismo constitucionalmente autónomo del Estado, cuyas funciones principales son la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, la representación de la sociedad en juicio, para los efectos de defender a la familia, a los menores e incapaces y el interés social, así como para velar por la moral pública, la persecución del delito y la reparación civil. También velará por la prevención del delito y por la independencia de los órganos judiciales, la recta administración de justicia y las demás que le señalen la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico de la Nación. En el ejercicio de sus funciones le corresponde conducir desde su inicio la investigación de todo delito, incluyendo aquellos que impliquen la violación de Derechos Humanos.

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA es el Organismo Superior del Sistema Nacional de Control, que, de acuerdo al artículo 82° de la Constitución Política del Perú, supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de instituciones sujetas a control. Conforme a la Ley N° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la



Contraloría General de la República, tiene por misión dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental, orientando su accionar al fortalecimiento y transparencia de la gestión de las entidades, la promoción de valores y la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos; así como contribuir con los Poderes del Estado en la toma de decisiones y con la ciudadanía para su adecuada participación en el control social.

CLÁUSULA SEGUNDA: DE LOS ANTECEDENTES

Declaración contra la Corrupción suscrita en la ciudad de Lima, por los representantes tanto del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, el 25 de mayo de 2011.

Las partes suscribieron dicha Declaración conscientes de que el desarrollo del país, y por ende, el bienestar de la sociedad requieren la una acción conjunta que reduzca los actos de corrupción. Para ello, las partes se comprometieron a ejercer una acción firme y coordinada en la lucha contra la corrupción, potenciando el accionar funcional que las vincula en los procedimientos que coadyuven a la prevención, detección, investigación, juzgamiento y sanción de los actos de corrupción, ya existentes o que puedan presentarse. Ello con el objetivo de contribuir a la erradicación de la corrupción, logrando así un resultado efectivo que genere y recupere la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad del Estado, propiciando de esta manera una sociedad más justa en la que se respeten los valores morales y éticos; y en la cual prime la transparencia y eficiencia en la gestión pública como medios para alcanzar el desarrollo de nuestra sociedad y el bienestar de todos los peruanos.

CLÁUSULA TERCERA: DE LA FINALIDAD

Mediante el presente Convenio, las partes reiteran el compromiso institucional de las mismas en la lucha contra la corrupción en nuestro país mediante la promoción de valores y la prevención y sanción de los actos de corrupción, consolidando así el estado Constitucional.

CLÁUSULA CUARTA: DEL OBJETO

El objeto del presente Convenio consiste en establecer un marco de mutua cooperación entre el **PODER JUDICIAL, EL MINISTERIO PÚBLICO Y LA CONTRALORÍA**, para que, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, y tomando como premisa el respeto de la autonomía en el ejercicio de las funciones que constitucionalmente le corresponden a cada una de estas instituciones, busquen promover y desarrollar una acción interinstitucional articulada que permita afianzar el proceso de armonización de políticas públicas referidas a la prevención, investigación y sanción de actos de corrupción. En ese contexto, los mecanismos de cooperación y desarrollo entre estas entidades consistirán en armonizar normas y procedimientos, asegurando así la eficacia de las acciones que se vayan a tomar en la lucha frontal contra la corrupción.

CLÁUSULA QUINTA: DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN y COMPROMISOS

En el marco del presente Convenio Tripartito de Cooperación Interinstitucional, las partes establecen las siguientes líneas de acción:



1. Armonización de normas y procedimientos para asegurar la eficacia de los resultados de las investigaciones efectuadas, a fin de lograr desterrar la impunidad sobre actos de corrupción detectados, para ello las partes se comprometen a:
 - Diseñar estrategias que permitan un tratamiento integral, articulado y eficiente de los delitos contra la administración pública y responsabilidad civil de funcionarios.
 - Diseñar un informe especial, elaborado por **LA CONTRALORÍA**, de acuerdo a las exigencias del nuevo Código Procesal Penal.
2. Desarrollo conjunto de Programas de Capacitación, impulsando una capacitación coordinada, para ello las partes intervinientes en el presente Convenio tomarán las siguientes acciones:
 - Organización de cursos virtuales de Especialización en Gestión Pública y Sistemas Anticorrupción.
 - Integración de los funcionarios de las tres entidades en los cursos o programas de especialización que pudieran organizarse en cualquiera de las tres instituciones.
 - Integración de los funcionarios de las tres entidades en los cursos o programas regulares que se dicten en los centros de capacitación de cualquiera de las tres instituciones.
3. Constitución de una Red Interinstitucional de comunicación e información que facilite el acceso a los sistemas de información tanto de **EL PODER JUDICIAL**, **EL MINISTERIO PÚBLICO** y **LA CONTRALORÍA** que contengan sentencias, denuncias e informes especiales respecto al tratamiento de los delitos contra la administración pública o sobre responsabilidad civil de funcionarios, en base a ello las partes podrán:
 - Acceder a los sistemas de precedentes y jurisprudencia desarrollados por las tres instituciones.
 - Acceder a los sistemas de información general con fines académicos, estadísticos y de investigación.
4. Establecer protocolos para el acceso a los sistemas de información que identifique personas involucradas en acciones de control, denuncias interpuestas por el Ministerio Público y procesos judiciales en curso.
5. Asimismo, **EL PODER JUDICIAL**, **EL MINISTERIO PÚBLICO** y **LA CONTRALORÍA** se comprometen a brindar las facilidades necesarias en lo que respecta a infraestructura, recursos humanos, materiales y tecnológicos de acuerdo a su disponibilidad presupuestal, con el objetivo de facilitar el desarrollo de las líneas de acción y las actividades que se desarrollaran para el cumplimiento de las mismas.



CLÁUSULA SEXTA: DE LA RESERVA DE INFORMACIÓN

Toda información proporcionada o compartida en virtud del acceso a los diferentes sistemas de información de cada una de las entidades parte será de carácter confidencial, comprometiéndose las partes a guardar absoluta reserva sobre la misma.

La información no podrá ser transferida ni compartida con terceros, sea con fines de lucro o a título gratuito, sin previo consentimiento de ambas partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: DE LA COORDINACIÓN

Para la adecuada coordinación y ejecución del presente Convenio, cada una de las instituciones designará un representante, designación que se deberá comunicar a las otras partes por escrito dentro de los 10 días hábiles posteriores a la firma del presente Convenio.

Los coordinadores(as) designados serán responsables ante sus respectivas instituciones del cumplimiento de las actividades que se acuerden y realicen en el marco del presente Convenio, así como de la ejecución, seguimiento y evaluación de las mismas.

CLÁUSULA OCTAVA: DE LA EJECUCIÓN

Para el cumplimiento del presente Convenio, las partes, por medio de sus coordinadores(as), elaborarán conjuntamente programas de actividades en el ámbito de los objetivos del presente instrumento.

Cuando la naturaleza de los actos requiera determinada formalidad, las partes deberán suscribir los Convenios Específicos que resulten necesarios, los que serán puestos a consideración de los órganos pertinentes de cada institución para su respectiva aprobación.

Estos Convenios Específicos regirán a partir de la fecha en que sean suscritos por las partes, y su vigencia estará supeditada a la vigencia del presente Convenio Marco.

CLÁUSULA NOVENA: DE LA CONTRAPRESTACIÓN

Las partes convienen en precisar que, tratándose de un Convenio de Cooperación Interinstitucional, las obligaciones contraídas por las partes en el presente documento no suponen ni implican el pago de contraprestación alguna entre las instituciones. Sin embargo, y en referencia a los gastos que genere la organización de las actividades descritas en el presente convenio, estas serán solo las que sean propias y presupuestadas por cada parte, de conformidad con la normativa vigente y la disponibilidad presupuestal autorizada por los respectivos órganos competentes.

CLÁUSULA DÉCIMA: DE LA VIGENCIA

El presente Convenio entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción y tendrá una duración de dos (02) años. La renovación de este convenio requiere necesariamente del acuerdo previo y por escrito de ambas partes. En consecuencia, y para la renovación del presente convenio, la parte interesada deberá solicitarla mediante documento escrito con treinta días de anticipación a la fecha de su vencimiento.



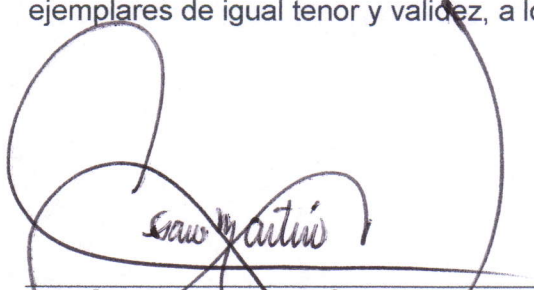
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Todas las controversias o diferencias que pudieren suscitarse entre las partes respecto de la correcta interpretación o ejecución de los términos de este Convenio, o de alguna de las cláusulas, incluidas las de su existencia, nulidad, invalidez o terminación, o cualquier aspecto adicional no previsto, serán resuelto de mutuo acuerdo según las reglas de la buena fe y común intención de las partes.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DEL DOMICILIO

Todas las comunicaciones que las partes se deban cursar en ejecución del presente Convenio se entenderán bien realizadas en los domicilios indicados en la parte introductoria de este documento. Toda variación del domicilio sólo tendrá efecto una vez comunicada por escrito a la otra parte.

Ambas partes suscriben el presente documento, en señal de conformidad, en dos (2) ejemplares de igual tenor y validez, a los dos días del mes de noviembre de 2011.


CÉSAR SAN MARTÍN CASTRO
Presidente del Poder Judicial


JOSÉ ANTONIO PELÁEZ BARDALES
Fiscal de la Nación




EUDÁKHOURY ZARZAR
Contralor General de la
República